



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL  
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

**VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA, RESPECTO PROYECTO DE DICTAMEN Y RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS PRECANDIDATURAS AL CARGO DE DIPUTACIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), 13, párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 7, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento **VOTO CONCURRENTE**, respecto del punto 2.1 del orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo General del INE) celebrada el pasado 25 de marzo de 2021, consistente en el proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y proyecto de Resolución del Consejo General del INE respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña presentados por los partidos políticos de las precandidaturas al cargo de Diputaciones Federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. En este sentido, si bien comparto el proyecto en lo general, me permito manifestar las razones por las que no comparto diversas consideraciones:

**Motivos de disenso.**

**1) Omisión de autoridades en dar respuestas a los requerimientos formulados por la Unidad Técnica de Fiscalización.**

Resulta pertinente señalar que el artículo 200 de la LGIPE, establece lo siguiente:

**Artículo 200.**

1. Las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud.
2. De igual forma la Unidad Técnica de Fiscalización podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la información y documentación necesaria



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL  
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

para el cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atender el requerimiento en los plazos señalados en el párrafo inmediato anterior.

Como puede advertirse del artículo en cita, tanto las autoridades, las instituciones públicas y privadas, así como los particulares, personas físicas o morales, se encuentran obligadas por mandato de ley, a proporcionar y/o atender los requerimientos que la autoridad fiscalizadora les formule, ello en un plazo no mayor a 5 días una vez realizada la consulta, situación que no está sujeta a duda alguna.

Ahora bien, es preciso señalar que durante el periodo de revisión de los informes de ingresos y egresos presentados por los sujetos obligados, relativos al periodo de precampañas en el PEL 2020-2021, de la Ciudad de México, se formularon sendos requerimientos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes si bien desahogaron algunos de los requerimientos que les fueron formulados, lo cierto es que se tiene registro de otros tantos respecto de los cuales no se ha dado respuesta alguna, como acontece en el presente ejercicio.

No debe ser óbice señalar, que en el presente ejercicio de revisión, se requirió información a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que proporcionará información relacionada con los módulos de atención ciudadana que tienen las y los Diputados Federales, respecto de lo cual, si bien se dio respuesta al requerimiento formulado, lo cierto en este caso, es que no se proporcionó información útil alguna que permitiera a la autoridad fiscalizadora, el debido cumplimiento de sus tareas, lo cual se traduce en una obstaculización a sus labores, lo cual no debe pasarse por alto.

En este sentido, estoy convencido que el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a ningún tipo de discrecionalidad, como ocurre en el presente caso, razón por la cual considero que, ante tales omisiones, se debieron ordenar sendas vistas tanto a los superiores jerárquicos de las autoridades involucradas, para que procedieran conforme a derecho.

## **2) Indebida construcción de la matriz de precios.**

El motivo de mi disenso, como ya me he posicionado en múltiples ocasiones anteriores, es que la metodología bajo la cual fue construida la matriz de precios de la presente revisión, parte de una evidente depuración excesiva, sobre lo cual, considero que si bien, como cualquier base de datos, debe llevar un proceso de detección y corrección de datos incorrectos, inexactos, incompletos o aquellas subvaluaciones y sobrevaluaciones, para luego modificarlos, sustituirlos o eliminarlos, cualquier otro tipo de depuración de información no tiene razón ni fundamento.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL  
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

De conformidad con lo establecido en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización (en adelante RF), la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante UTF) debe elaborar una matriz de precios, para la determinación del valor de los gastos no reportados, subvaluaciones y sobrevaluados, con información homogénea y comparable, tomando en consideración aquella información relativa al municipio, distrito o Entidad Federativa de que se trate, respecto de lo cual, debe construirse tomando en consideración a la totalidad de los conceptos reportados en el periodo sujeto a revisión.

En ese marco, la matriz de precios que se presenta resulta -ante la depuración excesiva, que conllevó a una eliminación injustificada de valores completos- ser una base de datos insuficiente para la valuación de los gastos no reportados principalmente, puesto que la exclusión de información afecta el cumplimiento de los criterios de determinación relacionados con la disposición geográfica y las condiciones de uso del tipo de bien o servicio en cuestión, además la eliminación no brinda certeza que se encuentran realmente los valores más altos reportados.

Cabe resaltar que la depuración es evidente en Entidades Federativas donde son muy pocos los conceptos de gastos listados en la matriz de precios, como ocurre en Baja California con 4 registros, o Chiapas y Tabasco con sólo 8 conceptos de gastos cada una. Si bien podría considerarse que son suficientes sólo 4 conceptos de gastos por una Entidad Federativa y que representan los valores más altos reportados, contrastando la información contenida en la matriz de precios con la información almacenada en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), la anterior hipótesis no es aceptada.

Para ejemplificar mejor las ideas, resaltaré la situación en Baja California, de la revisión al SIF podemos encontrar que en el ID de Contabilidad 65697 del Partido de la Revolución Democrática se reportaron pinta de bardas, concepto que no se encuentra en la matriz de precios de la mencionada Entidad Federativa.

La limpieza desmesurada de los conceptos de gasto en la matriz de precios representa mayor relevancia cuando se actualiza el supuesto de egreso no reportado. Como ocurrió en el ejemplo de Baja California. Durante la revisión de Movimiento Ciudadano, ID 7, se acreditó que el sujeto obligado omitió reportar 17 bardas, por lo que la UTF para la determinación del costo tuvo que recurrir a datos de Jalisco.

Es importante destacar, que el RF prevé las ausencias de información dentro de la matriz de precios, estableciendo que, en caso de no existir información suficiente en la Entidad Federativa involucrada, se podrá considerar aquella información de Entidades Federativas que cuenten con un ingreso per cápita semejante, es decir, esta previsión constituye una excepción. Sin embargo, al descartar información de la matriz, como acontece en este caso, esta excepción se ha convertido en una práctica y opción recurrente de la UTF al momento





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL  
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

de su construcción y determinación de costos. Lo anterior, a la postre impacta de manera negativa en la certeza de los resultados de la fiscalización de los sujetos obligados.

No obstante, para seguir con el ejemplo, Jalisco no tiene un ingreso per cápita semejante al de Baja California de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, referente a Producto Interno Bruto a precios corrientes, correspondientes al 2019, así como los datos referentes a la población proyectada 2019 del Consejo Nacional de Población. Adicionalmente, el registro de pinta de bardas en el ID de Contabilidad 65697 es un valor más alto al valor de Jalisco utilizado por la UTF para la determinación de precios.

Lo verdaderamente apegado al RF es contar con todos los valores reportados por todos los partidos políticos, de no hacerlo se pierde información relevante especialmente para la determinación de los egresos no reportados, puesto que la información completa, precisa y la calidad de datos son esenciales para dicha consideración.

En consecuencia, considero que, bajo esta lógica, la matriz de precios siempre estará incompleta y no constituye un documento que ofrezca los parámetros suficientes y razonables que den certeza en nuestro actuar institucional.

Por lo anterior, no puedo acompañar la metodología bajo la cual fue construida la matriz de precios, porque la depuración a la que fue expuesta rompe con la lógica misma de la referida matriz, como un instrumento con un efecto autorregulador de los propios actores políticos y de ser un mecanismo disuasivo para erradicar el egreso no reportado.

### **3. Sancionar como falta de forma el prorrateo no realizado a la totalidad de los precandidatos**

- Partido Verde Ecologista de México, ID 29, Conclusión 5-C1-FD.
- Partido Encuentro Solidario, ID 56, Conclusión 8-C2-FD.

A partir de los monitoreos desplegado por la UTF, durante el periodo de precampañas del PEF 2020-2021, identificó la existencia de diversos hallazgos al Partido Verde Ecologista de México y al Partido Encuentro Solidario, consistentes en propaganda genérica en la referida etapa comicial, mismos que deben conformidad con las reglas dispuestas en el Acuerdo INE/CG518/2020, deben ser contabilizadas y prorrateados entre los diversos precandidatos y precandidatas beneficiadas, situación que no acontece en la especie.

En este sentido, se tiene constancia de que los sujetos obligados no reconocieron en la totalidad de las contabilidades de sus precandidaturas registradas, los gastos relativos a los spots de radio y tv genéricos materia de observación, por lo cual, se determinó imponer ante dicha infracción, una sanción equivalente a 10 Unidad de Medida y Actualización (UMA).



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL  
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

Es preciso señalar que, al no registrar en el conjunto de las contabilidades beneficiadas un egreso determinado, como en este caso lo es lo relativo a la propaganda genérica, estamos ante un prorrateo no realizado a la totalidad de las precandidaturas, y no así ante un simple error contable, vulnerando lo dispuesto en el artículo 218 Bis del RF, que a la letra señala:

Artículo 218 Bis.

1. En caso de que los partidos políticos realicen algún gasto en el que se pueda identificar la imagen o nombre de dos o más precandidatos, dentro del período de precampaña, deberán realizar el cálculo y registro respectivos en el Sistema de Contabilidad en Línea, considerando a las precampañas beneficiadas.

(...)

A partir de lo anterior, y en congruencia con el precedente relativo a la precampaña del Proceso Electoral 2017-2018, en el Acuerdo INE/CG347/2018, se determinó ante un caso similar como el que nos ocupa, que la infracción se debe de considerar como grave ordinaria y sancionarse con el 30% del monto involucrado.

Así, el prorrateo es más que un tema de proporción del gasto, es un mecanismo que permite que las contiendas electorales sean equitativas, por lo que minimizar como una falta de forma que no se impacte correctamente el egreso entre las precandidaturas beneficiadas potencializa la pulverización o acumulación del gasto, lo cual afecta directamente a los topes de gastos de precampaña establecidos.

En este sentido, estoy convencido que, para que las sanciones cumplan con su función persuasiva e inhibitoria, el Consejo General del INE debe ser consistente en sus determinaciones sancionando como falta de gravedad ordinaria el indebido prorrateo, razón por la cual, no acompañe las sanciones impuestas por la mayoría de las y los Consejeros de este órgano colegiado.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, emito el presente **VOTO CONCURRENTE**.

**JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA**  
**CONSEJERO ELECTORAL**

